RESUELVO

Estimar parcialmente el recurso interpuesto por don Eduardo Rodríguez Vela, en representación de "Electrónicos Rodríguez Vela, S.L.", reduciendo la cuantía de la sanción a un total de 2.102 €, -1.500 euros, como responsable de una infracción a lo dispuesto en los artículos 4.1.c) y 25.4 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en los artículos 21, 22, 23, 24, 26 y 43.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre, tipificada con el carácter de grave en el artículo 29.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril y artículo 53.1 de dicho Reglamento, y 602 euros como responsable de una infracción, tipificada con el carácter de grave en el artículo 29.5 de la citada Ley-, y graduando la sanción conforme lo dispuesto en el artículo 31.7 de la citada Ley y artículo 131.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre y la Instrucción 1/01-MR, siendo los criterios de graduación los siguientes:

- El error en la documentación incorporada en la máquina.
- La máquina -objeto del expediente- aunque no fue legalizada su situación por la empresa operadora durante la sustanciación del expediente sancionador, fue dada de baja por la empresa, por lo que ha tenido una escasa repercusión económica en la citada empresa, por lo que dicha circunstancia hay que tenerla en cuenta para graduar la correspondiente sanción administrativa.

Notifíquese al interesado, con indicación expresa de los recursos que procedan. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de 30.6.2004), Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio de Legislación, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por don Francisco Soriano Carretero y don María Gutiérrez Mariscal contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en Córdoba, recaída en el expediente 258/03.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal a los recurrentes don Francisco Soriano Carretero y doña María Gutiérrez Mariscal de la Resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a ocho de octubre de dos mil cuatro.

Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero. El día 1 de diciembre de 2003 el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba acordó la iniciación de expediente sancionador contra don Francisco Soriano Carretero y doña Antonio Gutiérrez Mariscal por carecer en la carpintería de la que son titulares de libro de hojas de reclamaciones.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente prevista, el 28 de enero de 2004 dictó resolución por la que se le impone a don Francisco Soriano Carretero y a doña María Gutiérrez Mariscal una sanción de 450 euros por infracción a los artículos 4.2 de la Ley 5/1985, de 8 de julio, de consumidores y usuarios de Andalucía, 2.1 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y 2 del Decreto 171/1989, de 11 de julio, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios en Andalucía, tipificada en los artículos 34.10 de la citada Ley Estatal y 3.3.6 del R.D. 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

Tercero. Notificadas las resoluciones el 30 de enero, los interesados interponen el 27 de febrero sendos recursos de alzada de contenido idéntico -que se acumulan en la presente resolución al amparo de lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común por su íntima conexión-, que basan en que no son ciertos los hechos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30 de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías y el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación.

Segundo. El presente procedimiento tiene su origen en un acta de la Policía Local de Córdoba (folio 19 bis del expediente) en el que los agentes hacen constar que la carpintería carecía de libro de hojas de reclamaciones y el artículo 137.3 de la LRJAP-PAC dispone que los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. El artículo 2 del Decreto 171/1989, de 11 de julio, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios en Andalucía establece que todos los establecimientos o centros que comercialicen bienes y productos o presten servicios en Andalucía, deberán tener

a disposición de los consumidores y usuarios un libro de “quejas y reclamaciones” y en cualquier momento el consumidor debe poder hacer uso de ellas, por lo que la infracción se ha cometido.

En la resolución del presente recurso se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, que reitera lo dispuesto en el 128.2 de la LRJAP-PAC sobre la aplicación de las disposiciones sancionadoras más favorables, al haber entrado en vigor después de la interposición del recurso.

Vistos los preceptos citados, y demás disposiciones concordantes y de general aplicación,

RESUELVO

Desestimar los recursos de alzada interpuestos por don Francisco Soriano Carretero y doña María Gutiérrez Mariscal contra la Resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba recaída en el expediente 258/03, y en consecuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos que procedan. El Secretario General Técnico, Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio de Legislación, por el que se notifica la resolución adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada interpuesto por don Javier y don Jesús Pascual del Pobil Rodríguez y don Angel Alfonso Crespo Santiago, en nombre y representación de Zona Lúdica, CB, contra otra dictada por el Director General de Espectáculos Públicos y Juego recaída en el expediente H 62/03-EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente don Javier y don Jesús Pascual del Pobil Rodríguez y don Angel Alfonso Crespo Santiago, en nombre y representación de Zona Lúdica, C.B., de la resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veinte de octubre de dos mil cuatro.

Visto el recurso de alzada interpuesto y con base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Acta levantada por la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma en Huelva, de fecha 13 de septiembre de 2003, a las 1,00 horas, se pone de manifiesto que en la localidad de Punta Umbría (Huelva), se ha inspeccionado el establecimiento denominado “Agrupina”, sito en Avenida Campo de Fútbol, s/n, con un aforo de más de 700 personas, dedicado a la actividad de Discoteca, detectándose las siguientes anomalías:

- Desarrollo de la actividad en local al aire libre, que está expresamente prohibido en el punto III 2.9. letra b) del Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Establecimientos Públicos, que exige siempre locales cerrados para las discotecas, con música pregrabada a un excesivo volumen sonórico, audible por tanto en el exterior a más de 500 metros de distancia, con pistas de baile y luces psicodélicas.

- Asimismo el local carecía del servicio de admisión y del servicio de vigilancia en el momento de la inspección, tampoco aporta la licencia municipal de apertura, el seguro de responsabilidad civil, ni el documento de aforo y horario.

- Por último se niegan a facilitar los datos de identificación del titular por órdenes telefónicas del dueño, obstaculizándose las labores de inspección y control.

- Posteriormente la Guardia Civil pudo comprobar, mediante actas levantadas sucesivamente a las 8,00 horas, 8,00 horas y 7,40 horas, los días 24 y 30 de agosto y 13 de septiembre de 2003, respectivamente, que en el citado local se incumplía el horario de cierre, permitiendo el acceso de personas y sirviendo consumiciones, rebasando el horario autorizado. Tales hechos son constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en la Ley 13/99, de 13 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

Con fecha 2 de octubre de 2003, por la Delegación del Gobierno en Huelva, es incoado expediente sancionador con el núm. 62/03-EP, en cuya virtud de imputaba a la entidad mercantil “Zona Lúdica, C.B.”, lo siguiente:

- Realizar la actividad de discoteca sin tener licencia de apertura, ni autorización para ello y en unas condiciones expresamente prohibidas en el Nomenclátor y Catálogo de Establecimientos Públicos al tratarse de un local al aire libre.

- La carencia del contrato de seguro obligatorio.
- La carencia del servicio de admisión y del servicio de vigilancia.

- El incumplimiento de los horarios de cierre autorizados.
- La carencia de documento de titularidad, aforo y horario.
- Obstaculizar gravemente las funciones de inspección, al prohibir el dueño que se facilitara cualquier tipo de información.

En cumplimiento de la normativa vigente, y a la vista de toda la documentación obrante en el expediente, con fecha 23 de febrero de 2004, el Instructor del expediente formula propuesta de resolución, en la que considera los siguientes hechos probados.

La dedicación del establecimiento a actividad distinta para la que está autorizado, ya que cuenta con una licencia de Bar Chiringuito y la actividad que efectivamente realiza es la de Discoteca y en local al aire libre, lo que incumple el Decreto 78/2002, de 26 de febrero; el día de la inspección